



Infraestructura: el eslabón perdido del desarrollo

Existe una multiplicidad de discrecionalidades superpuestas: lo que aprueba el Gobierno central lo traba el regional, lo que avanza en Lima lo detiene el municipio distrital.

El Perú enfrenta un problema que todos conocemos: cada año iniciamos 13,000 proyectos de infraestructura y dejamos inconclusos 10,000. Esta estadística no es solo un dato técnico; es el retrato de un sistema que desperdicia recursos y perpetúa brechas de desarrollo.

Los diagnósticos están escritos hasta el cansancio. Lo que urge ahora, de cara a un nuevo ciclo electoral, es discutir propuestas concretas para despejar y llevar bienestar real a la población. La rehabilitación o construcción de infraestructura requiere una secuencia lógica: planeamiento riguroso, presupuesto comprometido, ejecución oportuna y operación con mantenimiento. Sin embargo, en la práctica esta cadena se rompe constantemente.

Carecemos de una planificación que organice las intervenciones, de un banco de proyectos bien hechos, con ingenierías completas y presupuestos realistas. Los proyectos no conversan entre sí: se construyen colegios donde no hay agua o puentes sin vías de acceso. La discrecionalidad burocrática reina en todos los niveles de gobierno, disfrazada de "objeciones técnicas" sin sustento sólido o de fundados temores al control de la Contraloría.

Gabón lo hizo bien en el 2010



contratando una firma estadounidense para orientar sus intervenciones en infraestructura. Otros países han creado autoridades técnicas autónomas contratando PMO de primer nivel, mecanismo que está disponible para el Estado peruano, sin necesidad de suscribir acuerdos entre gobiernos. No es imposible, requiere decisión política y consenso sobre algunas verdades incómodas, como que es fundamental enfrentar el tema del uso eficiente de los fondos municipales, regionales, el canon y Foncomún, para que el esfuerzo sea nacional y no una sumatoria descoordinada de iniciativas sin valor agregado.

Los cambios de gobierno congelan decisiones. Los funcionarios salientes temen aprobar, mientras los entrantes revisan todo "porque lo aprobó el

anterior". Existe una multiplicidad de discrecionalidades superpuestas: lo que aprueba el Gobierno central lo traba el regional, lo que avanza en Lima lo detiene el municipio distrital.

La solución pasa por decisiones estructurales: crear una instancia técnica y autónoma encargada del planeamiento y elaboración de ingenierías. Asignar recursos presupuestales a lo priorizado, comprometiendo el gasto sin dejarlo abierto a negociaciones políticas. Sacar proyectos al mercado solo después de tener ingeniería completa. Y comprometer recursos para operación y mantenimiento desde el inicio.

Las trabas no son abstracción técnica. Seguimos sin concluir la longitudinal de la Sierra Tramo II, y el aeropuerto y los puentes no tienen conexiones con la ciudad. En La Chira, un alcalde distrital pudo retrasar un año una obra urgente de saneamiento y algo similar sucedió con la desaladora de San Bartolo.

Es una agenda grande que requiere decisión, pero fundamental para garantizar que las brechas no sigan ahondándose. No es una cuestión técnica, es voluntad política y visión de país.

“**La discrecionalidad burocrática reina en todos los niveles de gobierno, disfrazada de 'objeciones técnicas' sin sustento sólido o de fundados temores al control de la Contraloría**”.